

APOYANDO LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA EN HONDURAS: EL RÉCORD DE LOS ESTADOS UNIDOS 2005-2006

Honduras es una democracia constitucional. En noviembre, José Manuel Zelaya Rosales del Partido Liberal ganó la presidencia en elecciones consideradas por observadores nacionales e internacionales como libres y justas. La capacidad de la anterior administración Maduro de respetar y promover los derechos humanos de los ciudadanos fue limitada por la corrupción gubernamental, impunidad para los violadores de la ley, y la violencia provocada por pandillas y el crimen organizado. Existieron serios problemas en diversas áreas. Se reportó que miembros de la policía, fuerzas de seguridad privada, y grupos clandestinos cometieron asesinatos extrajudiciales y ejecuciones arbitrarias y sumarias. Grupos de derechos humanos acusaron a ex oficiales de las fuerzas de seguridad y a la comunidad empresarial de estar coludidos para organizar “escuadrones de la muerte” que perpetraron asesinatos extrajudiciales, particularmente de jóvenes en la calle. Las condiciones en las prisiones continuaron siendo crueles y peligrosas, y generalmente los detenidos no recibieron el beneficio de un debido proceso. Miembros de las elites económicas, militares y políticas disfrutaron de una considerable impunidad con respecto a violaciones de la ley. La violencia y discriminación contra la mujer y la discriminación contra personas indígenas continuaron, incluyendo el fracaso del gobierno de resolver prolongadas disputas sobre la propiedad de tierras en territorios tradicionalmente reclamados por comunidades indígenas. La administración de la justicia fue problemática, debido a la existencia de una fuerza policial ineficiente, con reducido personal y financiamiento, así como fiscales y funcionarios de justicia expuestos a la corrupción e influencias políticas. El trabajo infantil, particularmente en áreas rurales, y la trata de personas continuaron siendo problemas serios.

La estrategia de los Estados Unidos en Honduras continuó apoyando los procesos políticos democráticos y enfatizó la necesidad del mejoramiento de las condiciones de derechos humanos, especialmente en las áreas del estado de derecho y en el combate a la trata de personas.

El Embajador y otros funcionarios estadounidenses trabajaron en conjunto con funcionarios del gobierno hondureño, ONGs, sindicatos y otras organizaciones para discutir sobre temas de interés particular y para promover reformas. Un alto funcionario estadounidense habló sobre estos temas con altos oficiales de la administración Maduro durante dos visitas en el verano y en el otoño. El gobierno de los Estados Unidos también envió a varios líderes de la sociedad civil y funcionarios gubernamentales para participar en Programas de Visitantes Internacionales en 2005, sobre temas como la administración de justicia, el estado de derecho, anticorrupción, sociedad civil, democracia y periodismo.

Estados Unidos proporcionó asistencia para las elecciones primarias abiertas del 20 de febrero de 2005 y las elecciones generales del 27 de noviembre de 2005. Estos esfuerzos pretendieron aumentar el conocimiento de parte de los votantes de las significativas y recientes reformas electorales, incluyendo el nuevo método de elección directa de los miembros del Congreso. Estados Unidos también facilitó asistencia para las elecciones a través del apoyo al Tribunal Supremo Electoral, al Registro Nacional de las Personas, y a la Fundación Internacional para Sistemas Electorales bajo un Acuerdo de Cooperación con el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Estados Unidos también colaboró con financiamiento a la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras

(FOPRIDEH) para apoyar una campaña de educación para votantes no partidista, y proporcionó financiamiento a la OEA para una Misión de Observadores Electorales tanto para las elecciones primarias como para las generales. Para las elecciones primarias abiertas de febrero de 2005, la Embajada tuvo más de 40 observadores electorales voluntarios. Para las elecciones generales de noviembre de 2005, la Embajada asistió con unos 60 observadores internacionales entrenados y proveyó un significativo apoyo logístico para facilitar la labor de los 112 miembros de la misión de observación de la OEA.

Estados Unidos continuó sus esfuerzos para promover la democracia por medio del desarrollo de instituciones democráticas transparentes y responsables en el nivel local. Estados Unidos proporcionó fondos para esfuerzos de desarrollo municipal para promover la descentralización y aumentar las capacidades para proveer servicios básicos en 32 municipios. Estados Unidos también financió un programa de promoción de la participación ciudadana y planificación democrática mediante la facilitación de procesos de diálogo entre ONGs y gobiernos locales.

Estados Unidos apoyó un programa para promover la libertad de prensa en Honduras mediante capacitaciones a periodistas y mejorando el conocimiento público sobre la importancia de medios de comunicación independientes.

Estados Unidos promovió el estado de derecho y la administración de justicia en diversas áreas, como reformas a la policía, al sistema judicial e iniciativas anticorrupción. Para fortalecer el desarrollo de una fuerza policial más profesional y reducir los abusos de derechos humanos, Estados Unidos facilitó un tercer año de apoyo para asistir a la Oficina de Asuntos Internos de la Policía para investigar denuncias, incluyendo aquellas de personas particulares, e hizo recomendaciones sobre cómo responder denuncias sustantivas, desde acciones disciplinarias administrativas a cargos criminales. Funcionarios estadounidenses también realizaron cursos básicos de investigación criminal para mejorar la efectividad de la policía y de la fiscalía.

Estados Unidos continuó apoyando al Programa de Fortalecimiento del Estado de Derecho. En su tercer año de ejecución, continuó el progreso de la aplicación del Código de Procedimientos Penales (CPP). Se han realizado más de 3,200 juicios orales en todo el país, incluyendo más de 1,400 en los juzgados piloto que participan en este programa en Tegucigalpa y San Pedro Sula. El CPP establece procedimientos de resolución de casos sin llegar al juicio similares a la declaración de culpabilidad o conciliación, y más de 3,200 casos fueron cerrados utilizando este mecanismo. Estados Unidos también apoyó la redacción de un nuevo CPP que, si es aprobado, modernizaría los procedimientos relacionados con las transacciones comerciales y privadas, incluyendo la tenencia de la tierra y las herencias. Asimismo, Estados Unidos apoyó los esfuerzos de la “unidad purgatoria” de la Corte Suprema para resolver los casos atrasados desde antes de la aplicación del nuevo código penal. A finales del año fiscal 2005, 176,000 casos fueron cerrados. El gobierno de Estados Unidos contribuyó a alcanzar la meta de esta unidad de completar todos los casos para diciembre de 2006 mediante el desarrollo de un Manual de Operaciones Internas que hizo que el proceso de depuración fuera más eficiente por medio de procedimientos uniformes. El manual también reguló potenciales abusos y aseguró la responsabilidad.

Con asistencia de Estados Unidos, FOPRIDEH promovió una participación más amplia y efectiva de la sociedad civil en las reformas al sector justicia y en la supervisión de los procesos de políticas públicas.

Para mejorar los esfuerzos del país en el combate a la corrupción, Estados Unidos facilitó fondos para iniciativas de transparencia y anticorrupción. Estas actividades incluyeron el mejoramiento de las capacidades de la institución superior de auditoría del gobierno, desarrollando y ejecutando una campaña de información pública sobre transparencia y anticorrupción, fortaleciendo las instituciones anticorrupción independientes nacionales y locales, y apoyando los esfuerzos de auditoría social de la sociedad civil para la supervisión y monitoreo de la utilización de los fondos públicos. La Embajada estimuló al gobierno y a la oficina del Fiscal General para procesar de forma determinada los casos de corrupción, especialmente aquellos que implican a funcionarios gubernamentales.

La Embajada organizó un seminario sobre Iniciativas de Derechos Humanos del Comando Sur para 65 militares y personal civil. Durante este intercambio de una semana, el ejército trabajó con personal del Comando Sur y participantes del gobierno y ONGs para realizar programas de capacitación y establecer relaciones de trabajo para promover y proteger los derechos humanos. Los derechos humanos fueron integrados en todos los niveles de capacitación académica y de campo, fortaleciendo el compromiso con las normas internacionales de derechos humanos y el estado de derecho.

En múltiples ocasiones, funcionarios estadounidenses conversaron con representantes del gobierno, del sector privado y sindicatos sobre la importancia de aplicar las leyes laborales y asegurarse que los derechos laborales fundamentales son protegidos. Estados Unidos financió un proyecto para fortalecer los sistemas laborales en Centroamérica llamado “Cumple y Gana”. Otro proyecto financiado por Estados Unidos apoyó los esfuerzos para mejorar el funcionamiento de los mercados laborales regionales mientras se fortalece la protección de los principios laborales fundamentales. También facilitó asistencia para la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y estableció alianzas con empresas privadas internacionales y ONGs, incluyendo el proyecto de Mejoramiento Continuo del Lugar de Trabajo en Centroamérica.

El trabajo infantil continuó siendo un problema significativo en Honduras. Estados Unidos apoyó al Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo, así como a otras organizaciones que realizaron proyectos enfocados en el combate y a la recolección de información sobre las peores formas de trabajo infantil. Estos proyectos contribuyeron en el combate a la explotación sexual comercial de los niños y para reducir el trabajo infantil en el sector agrícola. El gobierno participó en un proyecto regional financiado por Estados Unidos para combatir el trabajo infantil por medio de la educación, el que incluía acciones directas en Honduras. Un experto estadounidense disertó en seminarios organizados por la Asociación de Manufactureros de Honduras sobre la prevención y erradicación del trabajo infantil forzado en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Honduras es un país de origen y tránsito para la trata de personas que son explotadas sexual y laboralmente. Estados Unidos proveyó capacitaciones, asistencia técnica, y equipo a

investigadores de la policía y fiscales que trabajan en el combate a la trata de personas, así como campañas de información pública sobre este tema. Estados Unidos también facilitó fondos para apoyar a la Policía de Fronteras para prevenir e interceptar el traslado de inmigrantes ilegales, incluyendo personas víctimas de trata. Una ONG estadounidense realizó un seminario patrocinado por el gobierno de Estados Unidos sobre técnicas para entrevistar víctimas de trata en Tegucigalpa para funcionarios gubernamentales y representantes de ONGs.